

*A*nálisis
e Investigación

EL ORDEN POLITICO EN LA VENEZUELA DE FIN DE SIGLO: DE LA INEFICACIA DECISIONAL AL NEOPOPULISMO

por Luís Aznar*

*Qué culpa tiene la estaca
si el sapo salta
y se ensarta. ***

Introducción

La cuestión venezolana, en relación al régimen político-institucional y su dinámica, ha sido abordada desde diversas perspectivas analíticas. Por ejemplo, Levine y Martz señalaron en su momento la importancia de los partidos políticos y de la lógica de encapsulamiento de ciertos conflictos en la constitución de un régimen democrático representativo y estable¹.

Interpretaciones críticas sobre el tipo de democracia instaurada a partir de 1958 fueron generadas por Karl², centrándose en el estudio de los pactos entre élites y en el uso por parte de las mismas de la renta petrolera. Nosotros hemos investigado el impacto del contenido de proyectos partidarios sobre la transición y consolidación del régimen³, mientras que ciertas rigideces y tensiones presentes en el sistema han sido atribuidas por Coppedge⁴ a lo que denominó la “partidocracia” venezolana.

* Profesor de Teoría Sociológica y Ciencia Política - Departamento de Humanidades (UDESA) y Carrera de Ciencia Política (UBA).

** Dicho popular venezolano.

¹ D. Levine : *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton University Press, 1973 y J. Martz : *Party elites and leadership in Colombia and Venezuela*, en *Journal of Latin American Studies*, vol. 24, febrero 1992

² T. L Karl : *Petroleum and political pacts : the transition of democracy in Venezuela*, en *Latin American Research Review*, 1987

³ L. Aznar : *Las transiciones desde el autoritarismo en Venezuela*. El Proyecto de Acción Democrática y sus efectos sobre el sistema sociopolítico, en *Desarrollo Económico*, N 117, Bs As, 1990

⁴ M. Coppedge : *Strong Parties and Lame Duks*. Presidential Partyarchy and factionalism in Venezuela, Stanford University Press, 1994

Tomando en consideración, entre otros, los resultados de las investigaciones antes mencionadas es posible plantear una cuestión sustantiva que intentaremos responder en este trabajo: ¿cómo han reaccionado los actores y las estructuras del régimen político venezolano a la fragmentación social y a las tensiones generadas por la crisis político-económica de fin de siglo?

Al concebir el estudio de las sociedades como el análisis y comprensión de la génesis y transformación de los sistemas de relaciones sociales –tanto de producción como de dominación–, surge con claridad la importancia de analizar las articulaciones entre actores y estructuras y la lógica que rige su dinámica de cambio. En este sentido un cierto orden social, constituido por dichos sistemas estructurados, puede ser entendido como el “espacio” en el que, bajo determinadas condiciones históricas, se desarrolla la praxis de los actores sociopolíticos.

Estos conjuntos de relaciones sociales presentan dos características que operan conjuntamente: permanencia y variabilidad. Por lo tanto, la relativa estabilidad que surge de las articulaciones entre las estructuras sociopolíticas y económicas, no es más que una objetivación transitoria de procesos relacionados con el accionar de los actores, tanto individuales como colectivos.

Todo orden político contiene en sí relaciones contradictorias y conflictivas que son las que determinan su transformación y las que permiten explicar su dinámica a través de las crisis sociales. Estas se presentan como resultado de las interrelaciones entre crisis económica –del sistema productivo– y crisis política –del sistema de dominación– y de sus distintas resoluciones históricas⁵.

En 1985, Lechner afirmaba que “cualquier análisis de la actual realidad latinoamericana constata una situación de crisis. Hablo de crisis para destacar el estado de descontento: se deja de tomar el estado de cosas existente como un orden normal y natural... para secularizar la visión mesiánica o tecnocrática de las transformaciones sociales propongo analizar la construcción de un nuevo orden social como un proceso de rupturas pactadas... (perspectiva que) por un lado se opone a una concepción que enfoca la lucha por el orden como una guerra y... por otro... a una concepción que identifica el orden con el consenso (de modo análogo a la utopía liberal del mercado como competencia perfecta)”⁶.

⁵ A. Gramsci: *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno*, Nueva Visión, Bs As, 1972.

⁶ N. Lechner: *¿Revolución o ruptura pactada?*, en *Crítica y Utopía*, N 13, Bs As, 1985, pp.51-53.

Más de una década después la mayoría de los problemmas en los que Lechner basaba sus reflexiones siguen vigentes. La actual situación regional, definida por varios analistas como una crisis de mutación, nos parece un ámbito propicio para la aplicación de teorías de alcance intermedio derivadas de la perspectiva más general que articula el accionar de los actores sociales con las crisis y los procesos de cambio.

Remmer⁷, estudiando comparativa y empíricamente regímenes autoritarios y democráticos, pone a prueba un conjunto de proposiciones que expresan que la competencia institucionalizada aumenta la durabilidad del régimen político democrático, que el impacto del desempeño económico sobre la durabilidad del régimen político está mediada por las instituciones políticas y que la durabilidad de los regímenes democráticos varía de acuerdo a su competitividad. Una de las principales conclusiones a las que arriba es que la sustentabilidad de los regímenes democráticos está condicionada fundamentalmente no por su desempeño económico sino por la existencia de oportunidades institucionalizadas de participación, confrontación y oposición.

Estos enfoques no pueden ser dejados de lado al analizar las situaciones latinoamericanas, sobre todo cuando se trata de prever el futuro de las relaciones entre el desarrollo de economías centradas en las relaciones de libre mercado y la dinámica de regímenes políticos democráticos pensada en términos de consolidación.

Como lo ha señalado Waisman "...la liberalización económica y la consolidación de la democracia están gobernadas por dos lógicas sociales opuestas... la privatización, la desregulación y la apertura de la economía están gobernadas por la lógica de la diferenciación. Su primer impacto sobre la sociedad es el aumento de la diferenciación social tanto en el sentido vertical como horizontal... Por el otro lado, la consolidación de la democracia está gobernada por la lógica de la movilización... Estas dos lógicas tienen el potencial para inhibirse mutuamente y consecuentemente para bloquear o dificultar la liberalización económica o la consolidación de la democracia o ambas cosas a la vez."⁸

Y en este análisis de situaciones conflictivas debemos acordar con Bobbio y Przeworski, por ejemplo, en que la democracia es un régimen caracterizado por una particular forma de procesar los conflictos⁹, pero sin

⁷ K.L Remmer: *The sustainability of political democracy*, en Comparative Political Studies, Vol.29, N 6, 1996.

⁸ C. Waisman: *The end of neomercantilism: Argentina and Chile as paradigmatic cases* (mimeo), 1997, Dept. of Sociology, University of California, San Diego, pp 25-27.

⁹ N. Bobbio: *The future of democracy*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1984 y A. Przeworski: *Democracy and the market*, Cambridge University Press, 1991.

olvidar y subrayando el hecho que la democracia, o si se prefiere la poliarquía, es en sí misma un régimen conflictivo.

Esta conflictividad se expresa, entre otras esferas, en la del orden político, en las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, en la que actores sociales individuales y colectivos con intereses específicos accionan políticamente para realizarlos. Para lo cual, con racionalidades y éticas diferenciadas hacen uso de las posibilidades, y tratan de superar las restricciones, que generan los ordenamientos institucionales más o menos estructurados.¹⁰

El estudio del accionar de los actores y sus conflictos, como así también de las diversas formas de procesamiento y resolución de los mismos remite necesariamente, entre otros elementos, a la discusión sobre los partidos y los sistemas de partidos¹¹. Este ámbito, el de la accountability vertical, se conecta con uno de los problemas políticos fundamentales: el de la representación política, sus formas, sus lógicas de funcionamiento y metamorfosis¹², articulado a su vez con la temática de la accountability horizontal.

En este sentido O'Donnell concluye una de sus discusiones sobre esta cuestión afirmando que “la efectividad de la accountability horizontal depende en buena medida de los tipos de accountability vertical –incluidas, aunque de ninguna manera exclusivamente, las elecciones– que sólo la poliarquía hace posible”.¹³

Es importante y necesario conectar lo anterior no sólo con la legitimidad de los gobiernos sino también con su eficacia decisoria: es decir, la capacidad para diseñar políticas públicas específicas, aplicarlas y mantenerlas en el tiempo hasta que hagan sentir sus efectos. La eficacia decisoria de un gobierno no sólo es un problema de mayor o menor institucionalización, es también al mismo tiempo una cuestión ligada a las características y al accionar de ciertos actores políticos relevantes, lo que nos permite diferenciar entre eficacias decisorias más o menos democráticas.

Como lo ha expuesto Immergut, las instituciones políticas ni transmiten demandas neutralmente ni tampoco ratifican solamente acuerdos. Por el contrario, configuraciones institucionales concretas generan contextos estra-

¹⁰ Para una crítica de cierto estructuralismo que minimizaba el accionar de los actores véase el ya clásico artículo de F.H. Cardoso: *Althusserianismo o marxismo?* a propósito del concepto de clases en Poulantzas, en R. Benítez Zenteno (comp.) *Las clases sociales en América Latina*, México, Siglo XXI, 1985.

¹¹ Véase S. Mainwaring and T. R. Scully (comps.): *Building democratic institutions. Party systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press, 1995

¹² Véase B. Manin: *Principes du gouvernement representatif*, París, Calmann-Levy Ed., 1995

¹³ Véase G. O'Donnell: *Accountability Horizontal*, en Agora, N 8, Bs As, 1998, p.29.

tégicos en los que se seleccionan aquellos intereses que serán expresados en forma efectiva y se determina cuáles prevalecerán sobre otros¹⁴.

En la perspectiva desarrollada por Kaiser, en su estudio sobre tipos de democracia desde una visión neoinstitucionalista, el análisis y la consideración de dichas configuraciones específicas es fundamental dado que pueden servir de “puntos de veto” para los diferentes grupos de interés¹⁵.

El análisis comparado de diversos sistemas políticos latinoamericanos contemporáneos permite afirmar que, con desarrollos institucionales similares, dependiendo de las características del accionar de las autoridades electas y los ministros y burocracias no electas, se pueden tomar tanto decisiones que afectan positivamente las posibilidades vitales de amplios sectores de la población como aquellas cuyas consecuencias son aumentar las tendencias hacia la concentración y la exclusión.

Lo anterior se explica, entre otras cosas, porque como lo ha señalado Przeworski “la representación contiene dos formas diferentes de las relaciones principal-agente: entre los ciudadanos como principales y los políticos electos como agentes y entre los políticos electos como principales y los burócratas no electos como agentes. Como las instituciones democráticas no contienen mecanismos que permitan a los ciudadanos sancionar directamente el accionar de los burócratas, el control ciudadano sobre los mismos puede ser sólo indirecto”.¹⁶

En estas condiciones puede producirse perfectamente el mantenimiento de los mecanismos de la democracia política pero las condiciones de exclusión social, que en algunos casos generan ciudadanías débiles o incompletas¹⁷, debilitan las posibilidades de su consolidación.

Nuestra perspectiva de análisis asume que el estudio específico del accionar de los diferentes actores, expresado en parte a través de los partidos políticos y los sistemas de partidos, en las formas de representación y en la expresión de apoyos y demandas conflictivas y en las formas de ejercer la dominación, cierra el círculo teórico-conceptual articulándose con el tema de la gobernabilidad y la estabilidad del régimen político democrático en tanto orden conflictivo.

¹⁴ E. Immergut : *Health Policies : Interests and Institutions in Western Europe*, Cambridge University Press, 1992

¹⁵ A. Kaiser : *Types of Democracy. From Classical to New Institutionalism*, en *Journal of Theoretical Politics*, London, 1997

¹⁶ A. Przeworski: *Minimalist conception of democracy: a defense*, (mimeo), Yale University, 1997.

¹⁷ M.Roche: *Rethinking citizenship*, Cambridge, Polity Press, 1992 y D. Zolo: *La strategia della cittadinanza*, en D. Zolo (comp.): *La Cittadinanza*, Bari, Laterza, 1994.

El análisis de la crisis en la democracia que viene afectando desde hace tiempo al sistema político venezolano y también el del surgimiento del liderazgo de Chávez, en términos de lo que Manin ha definido como representación personalizada, son para los interesados en el estudio de los procesos de consolidación democrática casi una situación de laboratorio.

¿El sistema de partidos mantendrá su matriz bipartidista o rotará hacia un multipartidismo atomizado? ¿Se convertirá este militar ex-golpista en un demócrata convencido y accionará en consecuencia, a partir de una lógica democrática, respetando la existencia de la oposición y aceptando los conflictos consecuentes? ¿O expresará en momentos de crisis conductas autoritarias tratando de evitar o fragilizar los mecanismos de accountability horizontal?

La crisis en la democracia venezolana y su impacto sobre el bipartidismo

El sistema político venezolano se asemeja a un conductor inglés manejando por América Latina, en el sentido de mostrar cierta tendencia a ir por el carril contrario.

Es así que a partir de 1958 y durante treinta y cinco años fue uno de los pocos regímenes democráticos consolidados de la región, en un océano de autoritarismos, democracias débiles y dictaduras sangrientas. Un régimen que entró en crisis justamente cuando la ola democratizadora de los 80 comenzaba a humedecer las playas políticas de los otros países iberoamericanos.

Hasta ese entonces la dinámica política se había expresado fundamentalmente a través del populismo democrático, diseñado, aplicado y sostenido por la social -democracia criolla (Acción Democrática) y el social -cristianismo caribeño (COPEI).¹⁸

Basado en una lógica de funcionamiento centrada en la conciliación de clases y a través de un articulado y extendido spoil system, el régimen democrático funcionó eficientemente durante décadas, mediante la mecánica del péndulo bipartidista, logrando el control político de la conflictividad. Su eficacia en este sentido se agotó a fines de los 80 como consecuencia, entre otros factores, de los desastrosos efectos de una inmanejable deuda externa, altos niveles de corrupción y una manifiesta pérdida de legitimidad de los sectores dirigentes a nivel nacional.

¹⁸ J.C. Rey: *La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación*, en *Revista de Estudios Políticos*, (nueva época), N 4, Madrid, 1991

Poco orgánicos pero de gran intensidad, los disturbios del 27 y 28 de febrero de 1989 (popularmente bautizados como *el caracazo*) se iniciaron como protesta contra algunas medidas contenidas en el plan de ajuste que intentó aplicar, desde una posición cercana al autoritarismo de mercado, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (Acción Democrática).

No fue solamente una de las pocas reacciones populares explícitas contra un plan de ajuste y reformas estructurales que se produjo en América Latina, al que de hecho lograron fragilizar, sino también la parte visible de un gran iceberg de desigualdades sociales, exclusión e ineficacia decisional contra el que impactó el Titanic de la democracia venezolana.¹⁹

Tres años después, en febrero de 1992 y como una de las derivaciones de la controversia suscitada en las Fuerzas Armadas por la “resolución militar” del caracazo, el hasta entonces desconocido teniente coronel Hugo Chávez encabezó un intento de golpe que fracasó rápidamente. En el mismo intervinieron jóvenes oficiales –enfrentados con los generales ligados a los partidos políticos tradicionales– de ideología nacionalista bolivariana y con un discurso populista y fuertemente antipartidario.

Los apoyos civiles confusos y en algunos casos post-factum provinieron, por un lado, de cierta derecha intelectual que centraba sus críticas en el sistema de partidos y en la “clase” política y, por otro, de algunos sectores de izquierda que creyeron presenciar un milagro político: la materialización de un extendido mito latinoamericano, pero con cierto origen egipcio, como lo es el golpe militar progresista, popular y anti-imperialista liderado por sectores medios de las Fuerzas Armadas.

Tanto las elecciones regionales para gobernadores de Estado como las nacionales dos años después, consagrando como presidente por segunda vez a Rafael Caldera (ex COPEI y uno de los patriarcas, junto con Rómulo Betancourt, de la democracia venezolana), si bien mostraron un debilitamiento de los partidos tradicionales, parecieron volver las cosas a la normalidad. Tanto es así que, rápidamente, Caldera –quien en su primera presidencia había hecho algo similar con los dirigentes guerrilleros de izquierda de los 60–, indultó a Chávez quien formó un movimiento político a través del cual comenzó a accionar desde la legalidad en una situación permeada por una crisis aparentemente incontenible.

Y como la realidad sociopolítica es dialéctica –Marx dixit, entre otros, hace ya mucho tiempo– hoy nos encontramos con Chávez electo democráticamente como presidente de Venezuela, jurando sobre una Constitución

¹⁹ L. Aznar: *Venezuela: inestabilidad y crisis en una democracia consolidada*, en Sociedad, N 2, Bs As, 1993.

que le permitió lograrlo pero a la que calificó de moribunda e intenta reformar, prometiendo una revolución popular pacífica, con el apoyo de casi el 60% de los electores, muchos de ellos, pertenecientes a sectores populares y medios, ex- partidarios desencantados de Acción Democrática y de COPEI.

Esta situación tiende a confirmar, al menos desde nuestra perspectiva, lo que han sostenido Gino Germani y Torcuato Di Tella en relación a los movimientos nacional-populares. El populismo no es solamente un fenómeno característico de una determinada época sino, básicamente, una particular relación entre cierto tipo de liderazgo personalista y sectores sociales en disponibilidad para movilizarse o ser movilizados en contextos de crisis social, política y económica.

Como proposición tentativa de análisis me parece posible enunciar que la actual situación en Venezuela puede entenderse en términos de una reacción neopopulista ante los efectos del fracaso tanto de las políticas públicas ligadas al Estado de Bienestar, como de las neoliberales y antiestatistas.

Neopopulista porque Chávez anuncia que habrá ajuste fiscal pero decreta casi simultáneamente un aumento general para el personal de la Administración Pública. Y porque no hay todavía claros indicios de cuál y cómo será en definitiva la relación del gobierno de Chávez con la mayoría del movimiento obrero organizado, relación que en la actualidad oscila entre la desconfianza y el enfrentamiento.

Lo anterior es un punto clave ya que los sindicatos son controlados fuertemente y en forma mayoritaria por militantes de Acción Democrática y en menor medida de COPEI. A modo de ejemplo sólo basta recordar que durante un largo período el máximo dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) fue al mismo tiempo Secretario General del partido Acción Democrática.

Un indicador del control de Acción Democrática sobre las estructuras sindicales surge de la comparación de la conflictividad laboral durante el primer gobierno de Carlos A. Pérez (Acción Democrática 1974-1978) y en el gobierno de Luis Herrera Campíns (COPEI 1979-1983).

Mientras que en el período 1974-1978 se llevaron a cabo 7 huelgas legales y 741 ilegales involucrando a 169.744 trabajadores con 3.999.315 horas de trabajo perdidas, en el período de la administración de COPEI se produjeron 11 huelgas legales y 759 ilegales participando de las mismas 187.013 trabajadores perdiéndose 10.595.268 horas de trabajo, lo que demuestra que no sólo se iniciaron menos huelgas durante el gobierno de Acción Democrática sino que las mismas fueron de menor duración.

Por lo tanto cabe la pregunta sobre la posibilidad de un populismo en América Latina sin intermediación de los sindicatos entre el líder y los sec-

tores populares y sobre la posibilidad de que el presidente Chávez reemplace, si no logra cooptarlas, a las estructuras sindicales por las militares.

En el contexto de una crisis social, nuestro argumento central tratará de desarrollar la idea de una continuidad (cuyo tipo discutiremos más adelante) entre el debilitamiento de los partidos tradicionales como actores centrales en el control de la conflictividad social, los disturbios conocidos como *el caracazo*, los intentos de golpes de estado y el surgimiento de un nuevo populismo de origen democrático bajo el liderazgo de Chávez.

La perspectiva desde la que estructuramos nuestra argumentación se articula con el hecho que la dinámica actual del régimen político venezolano, por sus características y desarrollo, permite utilizar el eje conceptual trabajado por L. Morlino en relación a las situaciones de crisis *en* la democracia por contraposición a las situaciones de crisis *de* la democracia.²⁰

La idea de crisis *en* la democracia se relaciona con dos emergentes empíricos básicos: *a*) suspensión del funcionamiento o mal funcionamiento, sobre la base de las normas existentes, de algunas estructuras, mecanismos o procesos cruciales del régimen (por ejemplo crisis de gobierno) o también de la relación legislativo/ejecutivo o de otras estructuras propias de cada tipo de régimen, burocracia o magistraturas. *b*) separación, división o mal funcionamiento de las relaciones sociedad/partidos o grupos/estructuras del régimen democrático, que se manifiestan en demandas de la sociedad civil que no se traducen o no pueden traducirse, por diversos motivos, en decisiones tomadas por el régimen, con consecuencias diversas, por ejemplo, la disminución de la eficacia decisional, de la efectividad y de la legitimidad.

La importancia de esta perspectiva radica en el hecho que la crisis en la democracia, en caso de no ser procesada o controlada adecuadamente, conduce bajo determinadas condiciones a la crisis de la democracia.

Pero la anterior no es la única salida posible: el caso del sistema político italiano ha mostrado en forma específica otra alternativa, que consiste en una larga crisis sin derrumbe de la democracia. ¿Será éste el futuro inmediato del sistema político venezolano?

Uno de los momentos iniciales de la actual crisis se desarrolló durante el gobierno del presidente Jaime Lusinchi (Acción Democrática, 1984-1988) en conexión directa con el tratamiento de la deuda externa. Los principales acreedores de Venezuela, a través del Comité de Bancos, asumieron una actitud intransigente negándose a proporcionar nuevos créditos y forzando en 1986 la firma de un acuerdo sumamente estricto, seguido de una fuerte devaluación.

²⁰ L. Morlino: ¿Cuál es la crisis democrática de Italia?, en *Crítica & Utopía*, N 13, Bs As, 1985.

En septiembre de 1987 se firmó un complemento al acuerdo anterior. El pago de la deuda (15 mil millones de dólares entre 1985 y 1988) fue acompañado de un plan de ajuste y austeridad que no logró controlar la inflación (40% anual) ni el aumento de la tasa de desempleo -7,7% según cifras oficiales y 35% según estimaciones extraoficiales-.

Manifestaciones callejeras y huelgas estudiantiles, algunas reprimidas con relativa dureza, indicaron que las tensiones sociales comenzaban a superar los mecanismos sociopolíticos de control de la conflictividad.

Paralelamente, desde los inicios de su administración, el presidente Lusinchi puso en funcionamiento la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) cuyas funciones eran diseñar políticas de modernización del Estado y reformas institucionales. En ese sentido, una de las pocas recomendaciones político-institucionales que se implementaron fue la elección directa de los gobernadores de Estado (que hasta ese momento eran nombrados directamente por el Presidente) que se realizó a principios de 1989 cuando ya había asumido una nueva administración.

La novedad, con consecuencias impredecibles en su momento, fue que la nueva administración surgida de las elecciones de diciembre de 1988 era liderada por un miembro prominente del mismo partido político que Jaime Lusinchi, Carlos A. Pérez, que de esta manera se convirtió por segunda vez en Presidente de la República como candidato de Acción Democrática.

La paralización de la dinámica del péndulo bipartidista fragilizó al sistema político en su conjunto, concentrando las tensiones económicas y sociopolíticas y haciendo visibles en forma directa las contradicciones inter e intrapartidarias de las dos organizaciones que hasta ese momento habían compartido el cuasi monopolio de la representación. La crisis social ya tenía armado su escenario: sólo faltaba que algunos actores entraran en escena y lo hicieron casi inmediatamente.

Antes de iniciar el análisis coyuntural de lo ocurrido en los últimos años nos parece importante mencionar aquí, para utilizarlas como elementos comparativos, dos conocidas interpretaciones de la dinámica sociopolítica venezolana contemporánea.

A mediados de los años 60, desde el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela y con apoyo del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), José Agustín Silva Michelena dirigió un trabajo cuyo objetivo era realizar un diagnóstico del sistema político venezolano, incluyendo la definición de alternativas para el desarrollo del país.

A partir de las hipótesis centrales de la denominada teoría de la dependencia y basándose en el análisis del proceso histórico desde la época de

la sociedad colonial, el equipo de investigadores concluyó que en Venezuela existía *una crisis de la democracia* y que para 1984 la situación sociopolítica tenía altas probabilidades de presentar las características de una nueva crisis revolucionaria.

Como lo sabemos, la democracia venezolana no fue sustituida por otro tipo de régimen político y la conflictividad de los 80 distó mucho de asemejarse a una crisis revolucionaria. Por el contrario, como lo hemos señalado anteriormente, a partir de ese momento el proceso sociohistórico venezolano parece adecuarse mucho más ajustadamente —en lo que hace a la dinámica del régimen político— a lo que Morlino define como una crisis *en la democracia*.

Por su parte uno de los más interesantes historiadores venezolanos contemporáneos, Germán Carrera Damas, luego de definir a la sociedad de su país como “implantada” generó una interpretación sobre el desarrollo de la misma a partir de la articulación de Venezuela con el sistema capitalista mundial. El núcleo de su indagación y uno de los elementos explicativos centrales es la existencia de lo que denominó el proyecto nacional de la clase dominante. Las diversas transformaciones económico-políticas serían entonces efectos directos de la redefinición histórica que la clase dominante realiza de dicho proyecto.

Sin desconocer la importancia específica de los sectores dominantes en la esfera económica y en la política, nos parece que esta interpretación tiende a dejar de lado, o al menos a minimizar, el impacto que sobre la dinámica política venezolana ha tenido el accionar de los sectores subalternos tanto en su versión coyuntural y contestataria, como en su forma más orgánica a través de la actividad de los sindicatos y confederaciones obreras.

El caracazo : la respuesta inorgánica al Plan de Reformas Estructurales

La candidatura de Carlos A. Pérez por parte de Acción Democrática para las elecciones de diciembre de 1988, las que finalmente ganó, generó en su momento dos movimientos encontrados.

Por un lado, sectores importantes de la dirigencia histórica de su propio partido se opusieron a la misma, temerosos de la concentración de poder derivada de una segunda presidencia, mientras que algunos sectores de dirigentes más jóvenes la apoyaron usándola como cuña contra la dirigencia tradicional.

Por otro lado, se estructuró un clima altamente positivo en la opinión pública, ligado al recuerdo de sus políticas desarrollistas y distribucionistas, a pesar de sus señalamientos en los discursos de campaña sobre la necesidad de aplicar un programa de reformas, cambio y transformación.

Lo anterior es importante porque permite comprender, en gran medida, la dinámica de la segunda presidencia de Pérez y su final: levantamiento inorgánico contra sus primeras medidas de ajuste, ruptura en parte de la relación de representación con sus votantes decepcionados y retiro de apoyo de la dirigencia de su partido en el Congreso, cuando la crisis se acentuó, permitiendo y promoviendo el juicio político que terminó con su destitución un año antes de cumplir su mandato constitucional.

Menos de un mes después de haber asumido el gobierno, al que llegó con el apoyo del 53% de los votantes en las elecciones de diciembre de 1988, lanzó un plan de reformas y restricción del gasto que fue diseñado y aplicado por su equipo económico. Los principales técnicos que fueron convocados a tal efecto, desde una perspectiva ligada al pragmatismo neoclásico, evaluaron sus decisiones económicas tomando como criterio fundamental la “autoridad” del mercado sin considerar, aparentemente, sus consecuencias políticas.

Durante el 27 y 28 de febrero de 1989 en un contexto de frustración de expectativas, demandas sociales insatisfechas y fragilidad de los mecanismos tradicionales de agregación y articulación de intereses (partidos políticos y sindicatos) se produjeron principalmente en Caracas, pero también en otras ciudades del interior, levantamientos sociales intensos aunque inorgánicos, que se iniciaron a partir del aumento del precio de la gasolina y por lo tanto del transporte.

La participación en los mismos no sólo de sectores marginales sino también de grupos de obreros y clase media baja, que sobrepasaron en su accionar a la dirigencia que pareció tan sorprendida como inoperante, indicaron que los mecanismos clásicos de control de la conflictividad comenzaban a presentar serias ineficiencias.

Consecuentemente, el gobierno debió apelar a las Fuerzas Armadas para que intervinieran en el control de la situación. El accionar del Ejército en función represiva directa se produjo luego de una intensa controversia entre los generales y un grupo de oficiales que expresaron su reticencia a enfrentar a lo que definían como “el pueblo” y del cual se consideraban parte integrante.

Uno de los núcleos de la argumentación de estos oficiales era que el problema debía ser resuelto por la dirigencia de los partidos políticos —que era la que lo había generado con su ineficiencia y corrupción— y que por lo tanto el Ejército no debía intervenir. Cientos de muertos y heridos marcaron el fin de un movimiento social que, aunque inorgánico e impensable algunos meses antes, dejaría una marca permanente en el sistema político.

El intento de reacción de la esfera política

Las respuestas a la situación de crisis manifestada por los sucesos de febrero se concentraron fundamentalmente en el ámbito político-institucional. El gobierno puso en funcionamiento una Comisión Bicameral para la Revisión de la Constitución cuyo objetivo, entre otros, era diseñar nuevos mecanismos institucionales de representación y participación política.

Asimismo, en diciembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones mediante voto directo para gobernadores de Estado, mecanismo incluido en la Constitución de 1961 pero nunca implementado hasta entonces.

Los resultados, sorprendentes para algunos observadores, parecieron indicar que en buena medida las tensiones se habían procesado políticamente y que el régimen tenía capacidad de autodinamizarse. Acción Democrática triunfó en once estados y en la Alcaldía de Caracas²¹ y COPEI impuso sus candidatos en siete estados.

La izquierda partidaria logró por primera vez éxitos electorales significativos. El Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo la gobernación de Aragua, un estado con alta concentración industrial, y Causa Radical (CAUSA R) autodefinido como un partido marxista basista no leninista —que hasta ese momento no había logrado superar el uno por ciento de los votos en las elecciones presidenciales— triunfó en el estado Bolívar, centro de la producción de acero y aluminio, expandiendo su influencia desde el área sindical a la política.

Pero la conflictividad afloró rápidamente en otro nivel: el de la confrontación intra e interpartidaria y en la expresión de grupos corporativos. En Acción Democrática, el partido de gobierno, parte de la dirigencia, que se había opuesto en su momento a la candidatura de Pérez, restaba apoyo públicamente a las políticas económicas del Presidente y su equipo.

Paralelamente, las tensiones entre los partidos sobrepasaron los límites de cualquier acuerdo y dirigentes de los partidos de oposición como así también algunas personalidades públicas de la cultura, ligadas a posiciones de centro-derecha, comenzaron a poner en cuestión la legitimidad presidencial.

Diversos grupos corporativos, que no veían asegurados convenientemente por el gobierno sus intereses económicos y políticos, también iniciaron un movimiento de alejamiento del mismo aumentando de esta manera su aislamiento con respecto a la sociedad civil.

²¹ Utilizamos los datos correspondientes a la elección directa del Alcalde de Caracas debido a que el gobernador del Distrito Federal sigue siendo nombrado en forma directa por el Presidente de la República.

En febrero de 1992, tres años después del caracazo y recordándolo en algunas de sus proclamas antipartidarias y nacional-populares, un sector de tenientes coroneles a punto de ser ascendidos y perder, por lo tanto, el mando directo sobre la tropa produjo un intento de golpe de estado. Liderado públicamente por el teniente coronel Hugo Chávez fracasó al no obtener apoyos significativos explícitos por parte de otros sectores, pero al igual que el caracazo dejó sus marcas en la sociedad.

Una de ellas fue fundamental ya que sirvió de base para la posterior reaparición pública de Chávez, devenido en dirigente político, luego de ser amnistiado años después por el entonces presidente Rafael Caldera.

Como lo ha señalado Abreu Sojo: “la mañana del cuatro de febrero de 1992, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, jefe del intento fallido de golpe de estado, rinde las armas en una presentación de 30 segundos de televisión.

(Lo) Observa un país expectante e inmediatamente, por el temple demostrado y ante una audiencia desencantada del sistema político, se produce la reacción carismática: en esos 30 segundos, el líder golpista pasa de una notoriedad pública de 0 a 100 por ciento.”²²

Independientemente de si la reacción fue carismática y causada por el temple demostrado o no, creemos que lo importante es que este hecho generó una particular articulación entre Chávez y sectores bajos y medios de la sociedad civil venezolana.

Como lo ha investigado y desarrollado B. Manin, a propósito de la metamorfosis de la representación política, en el ambiente de la democracia de lo público la representación tiende cada vez más a personalizarse y eso es lo que parece haber sucedido con Chávez.

A fines de 1992 se realizaron nuevamente elecciones directas para gobernadores de Estado cuyos resultados indicaron que comenzaban a hacerse sentir los efectos de la crisis sobre Acción Democrática, el partido de gobierno. Este perdió el control de varios estados, en los que triunfó COPEI, y el de la Alcaldía de Caracas donde se impuso Causa R demostrando una capacidad de expansión política, hasta ese momento, casi imposible de predecir, mientras que por su parte el MAS volvió a triunfar en Aragua.

El clásico bipartidismo que había regido la política venezolana desde los años 60 se había desestructurado, al menos a nivel regional.

²² I. Abreu Sojo: *Líderes, imagen pública y medios de comunicación*, en Revista Latina de Comunicación Social, Tenerife, enero de 1998.

La transformación del formato del sistema de partidos a nivel nacional

Como lo hemos señalado anteriormente la segunda administración del presidente Carlos A. Pérez terminó abruptamente cuando el mismo fue destituido mediante un juicio político, acusado de mal manejo de fondos reservados. Su mandato fue completado por Ramón J. Velásquez, luego de ser propuesto por el Congreso de la Nación.

En este contexto se desarrolló la campaña para las elecciones presidenciales de diciembre de 1993 en la que se concretaron algunas de las tendencias que habían comenzado a emerger en el período anterior.

Uno de los casos más interesantes es el accionar de Rafael Caldera, uno de los fundadores del sistema político venezolano contemporáneo, creador y dirigente histórico de COPEI, uno de los firmantes privilegiados del Pacto de Punto Fijo en 1958 y coordinador de la redacción de la Constitución de 1961.

No pudiendo lograr la nominación por parte de COPEI formó, a partir de un discurso de contenido fuertemente antipartidista, un movimiento denominado Convergencia y apoyado sorprendentemente por el Movimiento al Socialismo y otros partidos menores ganó las elecciones.

Pero el análisis de los resultados generales permite percibir con claridad que el bipartidismo clásico (AD y COPEI concentraban hasta ese entonces alrededor del 80% del total de votos) había llegado a su fin histórico.

Caldera logró sumar el 30,5% de los votos (17% de Convergencia, 11% del MAS y 2,5% de varios partidos pequeños), el candidato de Acción Democrática el 23%, el de COPEI 22% y el de CAUSA R 22%. Esta clara fragmentación, que transformó el formato del sistema de partidos a nivel nacional, se reflejó en el Congreso por lo cual el presidente Caldera se enfrentó a serias dificultades en el proceso de diseño y aplicación de políticas públicas.

Sin embargo, la crisis determinó que el Congreso, afectado por esa misma fragmentación, tuviera que delegar en el Presidente, si bien lo hizo por un período acotado de treinta días, la facultad de decretar leyes en materia económica y financiera.

La administración del Presidente Caldera no logró superar en sus cinco años las incoherencias de su propio origen. Tensionada entre la perspectiva político-económica del propio Caldera que se oponía, desde su posición social-cristiana, a un ajuste definido como inhumano y la necesidad objetiva de poner en marcha reformas estructurales para acotar la crisis, hecho apoyado por buena parte de los miembros más prominentes del Movimiento al Socialismo su contraparte en la coalición gobernante.

El resultado previsible fue el incremento de la conflictividad en la sociedad civil, dividida por un lado entre los grupos y corporaciones que insistían casi melancólicamente en el retorno a las épocas del Estado de Bienestar y aquellos que exigían la aplicación de planes de liberalización, ajuste y control del gasto público, pero bastante uniforme, por otro lado, en sus críticas a los políticos y a los partidos a los que acusaban de ineficacia gubernamental y corrupción.

Y llegó el teniente coronel y mandó parar

En el contexto de la campaña para las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, los partidos tradicionales, ya debilitados, se debatían entre las tensiones internas y la innacción.

Partidos no tradicionales, como CAUSA R, sufrían también problemas serios, algunos debidos a su explosivo crecimiento y otros relacionados con sus políticas de alianzas, hecho éste último que también afectó al Movimiento al Socialismo.

La incertidumbre era de tal magnitud que durante varios meses los sondeos de opinión ubicaron primera en intención de voto para presidente a Irene Saenz, ex reina de belleza y Alcaldesa de Chacao —una de las subdivisiones político administrativas de Caracas—.

Lo interesante de este fenómeno es que se basaba simplemente en la correcta administración de un municipio y en la solución de problemas casi cotidianos como el tránsito, los baches y la recolección de residuos entre otros.

Su meteórico ascenso comenzó a debilitarse justamente cuando se hizo público el apoyo que recibía de ciertas figuras políticas provenientes de partidos tradicionales, como por ejemplo algunos dirigentes de COPEI.

La evidente y extendida crisis de legitimidad que afectaba al régimen político venezolano, empíricamente estructurado en un Estado de partidos ahora ineficiente e ineficaz, fue el nicho ecológico en el cual se implantó con fuerza el mensaje crítico y fundamentalmente antipartidos del ex teniente coronel Chávez al frente de su Movimiento V República.

Desde una posición nacionalista y popular e implementando una amplia política de alianzas hacia la centro izquierda, en la que incluyó a parte del MAS, de CAUSA R, del partido Comunista Venezolano (PCV) y del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), sus índices de apoyo comenzaron a aumentar sistemáticamente a medida que se acercaba la fecha de las elecciones presidenciales de diciembre.

A principios de noviembre de 1998 se realizaron las elecciones parlamentarias que, para tratar de evitar el posible efecto de arrastre, fueron en su momento, desfasadas de las presidenciales.

Los resultados de estas elecciones, un verdadero test de las posiciones de los diferentes partidos y alianzas, confirmaron por un lado la movilidad y dinámica del voto e indicaron por otro que el Polo Patriótico, unión de los diferentes grupos de apoyo a Chávez, mostraba una considerable capacidad de representación de sectores sociales en disponibilidad, como consecuencia tanto de la crisis de representación por la que pasaban las estructuras partidarias tradicionales como de los procesos de exclusión social generados por la crisis económica.

Sin embargo, es importante notar que Acción Democrática seguía siendo, al menos hasta ese momento, el partido con mayor capacidad de movilización del sistema político venezolano. Esto le otorgaba la posición de primera minoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Consecuentemente, aún si no ganaba las presidenciales ostentaría una gran capacidad de intervención en el accionar parlamentario.

Cuadro N° I

Venezuela. Elecciones parlamentarias del 8-11-1998
Número de Diputados y Senadores obtenidos por los principales partidos y alianzas

	Diputados	Senadores
Acción Democrática	62	19
Polo Patriótico (Chávez y aliados)	45	12
COPEI	27	7
Proyecto Venezuela (Salas Romer)	21	1

Fuente: Consejo Nacional Electoral.

La tardía y a la postre ineficiente reacción de los grupos políticos tradicionales (fundamentalmente Acción Democrática y COPEI) consistió en encolumnarse detrás de la candidatura del empresario Salas Romer, quien al frente del movimiento Proyecto Venezuela exhibía índices de intención de voto para presidente superiores a los de su propios candidatos.

En diciembre de 1998 Hugo Chávez, encabezando una amplia coalición, fue electo Presidente de la República para el período 1999-2003 representando al 56% de los votantes.

Cuadro N° 2

Venezuela. Elecciones Presidenciales de diciembre de 1998

Candidato	Partidos	Votos Absolutos	%Votos
Chávez	MVR, MAS, PPTPCV, MEP y otros	3.673.685	56,2
Salas Romer	PRVZLA, AD, COPEI y otros	2.613.161	39,27
Saenz	IRENE, FD y otros	184.568	2,82
Alfaro	ORA,URD y otros	27.586	0,42
Rodriguez	Apertura	19.629	0,3
Ramos	La Causa Radical	7.275	0,11
Otros		11.400	0,17

Fuente: Cálculos propios sobre datos del Consejo Nacional Electoral

La matriz de un nuevo bipartidismo

La crisis en la democracia que afecta al sistema político venezolano ha producido, en relación al formato del sistema de partidos, una serie de cambios tanto cuantitativos como cualitativos, que es importante analizar a fin de lograr una comprensión más adecuada de su dinámica.

Desde sus orígenes en 1958, luego de la segunda transición desde el autoritarismo, el actual régimen político venezolano mostró una tendencia hacia el bipartidismo. Pero a partir de las elecciones de diciembre de 1973 el bipartidismo adquirió características estructurales, los dos principales partidos del sistema (Acción Democrática y COPEI) concentraron más del ochenta por ciento del total de votos: 84% en 1973, 88% en 1978, 88% en 1983, 93% en 1988, alternándose además en el control del aparato estatal.

Esta lógica de funcionamiento, aparentemente estructurada y estabilizada, llegó a su límite mostrando serias ineficacias en el control de la conflictividad social y por lo tanto en el mantenimiento del orden político en condiciones de estabilidad.

Como ya lo hemos señalado, la ruptura del péndulo bipartidista producida en las elecciones de diciembre de 1988 con el triunfo –por segunda vez

consecutiva- de un candidato de Acción Democrática sintetizó y agudizó al mismo tiempo la crisis sociopolítica y económica que se expandía por el sistema.

La solución a las tensiones pareció darse, en las elecciones de diciembre de 1993, con la superación del formato bipartidista y la irrupción de un pluralismo limitado en un abanico que abarcaba desde el centro a la centro izquierda (Acción Democrática 23%, COPEI 22%, Causa R 22%, Convergencia 17% y el MAS 11%).

Ahora bien, los resultados de las últimas elecciones indican que el bipartidismo, ahora expresado a través de coaliciones y alianzas, ha retornado y con más fuerza al sistema político venezolano. Es que los dos principales candidatos concentraron el 95% de los votos, la sumatoria más elevada de la historia del régimen político venezolano contemporáneo.

Pero lo más interesante del caso, desde nuestra perspectiva, es que los actores colectivos han cambiado su posición en el sistema. Acción Democrática y COPEI, anteriormente los polos del sistema bipartidista se encuentran en la actualidad formando parte de la misma coalición opositora.

En la coalición electoral ganadora, además del movimiento de Chávez, se observa la presencia entre otras fuerzas del Movimiento al Socialismo, otrora aliado con Caldera en la administración anterior y del movimiento Patria Para Todos.

El análisis del accionar de este movimiento es de gran importancia por su significado ya que se trata de un desprendimiento de CAUSA R que aportó a la coalición de Chávez no solamente un porcentaje cuantitativamente importante de votos (basta recordar que el candidato de CAUSA R con el partido unificado logró obtener el 22% en las elecciones de 1993 y que en las últimas esa cifra bajó al 0,11%) sino que además realizó un aporte cualitativamente casi tan importante o más que el anterior.

Se trata de una base social mayoritariamente obrera ligada fuertemente a la vida y al accionar sindical opositor a los partidos tradicionales. Este dato adquiere gran relevancia, sobre todo conociendo la estrecha conexión que hasta ahora habían mantenido Acción Democrática y COPEI con el resto de las bases sindicalizadas.

Conclusiones

Una cuestión clave para el análisis de la trayectoria futura del régimen y del orden político venezolano es si la coalición electoral ganadora podrá redefinirse adecuadamente en términos de una coalición de gobierno eficaz y con posibilidades, por lo tanto, de mantener un orden político relativamente estable.

En las condiciones críticas actuales, la visión y el accionar político neopopulista del presidente Chávez, expresados en aplicar una lógica que consiste básicamente en prometer y tratar de satisfacer todas las demandas de todos los sectores simultáneamente, permite preanunciar a corto plazo el surgimiento de tensiones sociopolíticas y económicas.

A modo de indicador de lo que estamos señalando retomamos aquí el ejemplo de su decisión de anunciar, al mismo tiempo, un programa de control de gastos y decretar un aumento general de salario para la administración pública o sus promesas de defender la propiedad privada y ofrecer solucionar paralelamente el problema de la falta de vivienda y de asentamientos para los sectores marginales y populares.

Como expresión directa de la altísima sensibilidad a las promesas que ha generado la crisis en estos sectores, a partir de la segunda semana de marzo, se produjeron a lo largo y ancho de Venezuela una serie de invasiones y tomas de edificios y tierras, algunas espontáneas y otras guiadas por activistas partidarios.

Mientras que miembros de Patria para Todos, uno de los partidos que apoyan a Chávez, acusan directamente a Acción Democrática de promover las tomas para desestabilizar al gobierno, sectores de la oposición señalan que es el propio discurso presidencial el que las está generando.

Con respecto a los sindicatos mayoritarios la relación actual es de claro enfrentamiento. En principio, Chávez colocó en el Ministerio de Trabajo a Leopoldo Puchi un miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), partido éste históricamente enfrentado tanto en lo político como en lo sindical sobre todo con Acción Democrática. Por cierto que el núcleo de esta disputa ha sido el sistemático accionar del MAS, por presentarse como el “verdadero” partido socialdemócrata venezolano a pesar de su escaso peso en la esfera sindical.

El primer intento, desde el Ministerio de Trabajo, para debilitar la hegemonía de los partidos tradicionales en esta esfera expresa directamente las principales líneas de la conflictividad: se trata de un proyecto para reformar la lógica de las relaciones de representación a partir de instaurar la elección *directa* (en la actualidad es de segundo y tercer grado) para los cargos en las Centrales y Confederaciones Obreras.

Otro tema que merece un seguimiento específico es el del uso de la estructura militar como base de apoyo en su relación con la sociedad civil. El Presidente Chávez no solamente ha nombrado en puestos claves a varios miembros de su camada que lo acompañaron en el frustrado intento golpista contra el gobierno del Presidente Pérez —ahora electo senador y por lo tanto un miembro importante y activo del bloque opositor en el Parlamento— sino

que ha diseñado y puesto en marcha el denominado Plan Cívico Militar Bolívar 2000.

El mismo consiste, en principio, en utilizar las capacidades ociosas de las Fuerzas Armadas, definidas por Chávez como parte del pueblo, para satisfacer las necesidades médico-asistenciales, educativas, ambientales y de infraestructura de la sociedad venezolana.

La respuesta de amplios sectores populares y marginales a la puesta en marcha del Plan parece preanunciar el reforzamiento de una particular y específica relación política entre estos sectores y el nuevo Presidente.

Es que, como ha sido señalado por algunos analistas políticos, durante el primer día de actividades, miles de hombres, mujeres y niños concurrieron a establecimientos educativos, asistenciales y militares incluidos en el Plan a plantear y buscar soluciones a sus necesidades y demandas específicas.

El otro eje de desarrollo de nuevas tensiones es el relacionado con la esfera institucional en general y en particular con la propuesta de Chávez de reformar la Constitución de 1961.

Sectores políticos que antes de la exitosa irrupción del hoy presidente en la política formaban comisiones para revisarla, en la actualidad se oponen firmemente a dicho intento y a la convocatoria a un plebiscito realizada por Chávez.

La incógnita principal es el sentido y contenido de las transformaciones constitucionales. ¿Se trata básicamente de permitir la reelección consecutiva como en la Argentina –posibilidad negada por la actual Constitución– y de esta forma asegurar la permanencia de Chávez en el control del Estado o se busca por el contrario promover un cambio institucional más profundo al estilo de lo que se intentó en su momento en Brasil?

Una cuestión básica sobre la que seguramente se generarán controversias y enfrentamientos abiertos es la relacionada con los partidos políticos y sus funciones.

La Constitución de 1961, lo que en su momento fue una verdadera novedad y avance político-institucional, reconoce explícitamente a los partidos políticos como elementos constitutivos principales del régimen político, mientras que el contenido específica y abiertamente anti-partidos del discurso de Chávez, con el que logró adhesiones populares significativas, permite preanunciar, al menos, un intento de restarles centralidad.

A fines de febrero de 1999, la opinión pública venezolana²³ se manifestaba mayoritariamente favorable (89%) al llamamiento a una Asamblea

²³ La fuente de los datos es el sondeo realizado, entre el 23 y el 28 de febrero, por la empresa DATANALISIS sobre mil casos a nivel nacional.

Constituyente. Pero este consenso se desestructuraba, surgiendo una clara contraposición de actitudes, a partir de la idea de Chávez de disolver el Parlamento, al menos en el tiempo de la Constituyente. Casi el 50% de los entrevistados apoyó la posibilidad de cesar las actividades legislativas y permitir en consecuencia que el Presidente gobierne a través de decretos-leyes, mientras que el 44% se oponía.

La corrupción y la ineficacia eran mencionadas centralmente por los que apoyaban la disolución del Congreso y la importancia de la división de los poderes públicos y los principios democráticos por los sectores que apoyaban su continuidad.

Un dato que no puede dejar de señalarse, por sus posibles consecuencias sobre el accionar gubernamental en el nuevo populismo venezolano, es que a medida que se desciende en la escala de estratificación aumenta sistemáticamente el apoyo a la disolución del Parlamento y la aceptación, por lo tanto, de una delegación ampliada del poder a favor del Presidente.

Esta marcada tendencia a la delegación ampliada, se percibe claramente cuando al analizar los datos surge el hecho que más del 30% de los entrevistados afirma que es el propio Presidente el que debe decidir qué sectores deben ser convocados a integrar la Constituyente.

Si algo parecido llegase a concretarse, ¿cuáles estructuras socio-políticas serán propuestas entonces desde el Polo Patriótico como sustitutas de los partidos, en cuanto a la agregación, procesamiento y representación de intereses?

Quizá el neo-corporativismo sea el complemento y la derivación casi directa de este nuevo populismo de base democrática, pero discursivamente antipartidario, que ha surgido en la Venezuela de fin de siglo.